

## GOBERNABILIDAD Y SU IMPACTO EN LA ECONOMÍA PERUANA

**Lima, 25 de abril 2022** | Una preocupante crisis de gobernabilidad, caracterizada por una institucionalidad fracturada debido a los conflictos entre el Ejecutivo y el Congreso, así como por las protestas sociales, viene afectando a la economía peruana y sus perspectivas de crecimiento. El Gobierno ha tenido a la fecha tres gabinetes en sólo ocho meses. Esta situación viene repercutiendo en el desempeño económico, que luego de una rápida recuperación en el 2021, en el 2022 presenta una proyección de crecimiento modesta (3.4%), sobre todo por un estancamiento de la inversión privada (0%), debido a la baja confianza empresarial producto de la incapacidad del Ejecutivo para resolver los conflictos, especialmente en zonas mineras, lo que ha desembocado en la paralización de la producción. Además, ello es agravado por la incapacidad del Gobierno en conformar un gabinete de confianza, mientras que en los ministerios se están perdiendo cuadros de personal técnico calificado debido a la injerencia política. A ello se le suman factores externos como la inflación global, que ya se venía presentando desde finales de 2021, pero se incrementó por el conflicto entre Rusia y Ucrania.

El incremento en los precios de los combustibles y alimentos fue el detonante de las protestas sociales encarnadas en el paro de transportistas y agricultores. Para hacer frente a estas demandas, el Gobierno viene ejecutando acciones que tienen un impacto negativo sobre la situación fiscal del país. En primer lugar, para enfrentar la inflación se tomaron medidas que reducirán los ingresos del Gobierno, como la exoneración de Impuesto General a las Ventas (IGV) a ciertos alimentos como el pollo, el aceite y los fideos, y también la exoneración del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) a los combustibles. Con ello se pretende reducir el impacto del incremento de los precios internacionales en el costo de la canasta básica. En segundo lugar, se han implementado medidas que implican un mayor gasto, como la inclusión en el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC) del GLP a granel, el diésel, y las gasolinas de 84 y 90 octanos. Para financiarlo no queda mucho margen, a pesar del incremento de ingresos por Impuesto a la Renta (IR) de las empresas

mineras por altos precios, las medidas populistas sin análisis técnico apropiado generarán un déficit fiscal mayor al proyectado.

Como una medida para elevar la recaudación tributaria, el Gobierno venía trabajando una “reforma tributaria” que dentro de sus principales componentes tenía previsto elevar los tributos a las empresas mineras para aprovechar las “sobre ganancias” que estarían percibiendo por los altos precios de los metales. Sin embargo, el informe del Fondo Monetario Internacional que el propio Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) solicitó al organismo internacional, concluyó que el sistema tributario minero peruano es competitivo y progresivo (es decir capta las llamadas sobre ganancias porque se graba la utilidad neta de las empresas). El sector minero peruano enfrenta una carga tributaria de 41.7%, comparable con la media de los principales países mineros, pero por encima de Chile, por lo que un incremento en la presión tributaria como la que se pretendía restaría competitividad a la industria.

El sector minero es un componente importante en el crecimiento de la economía peruana, no sólo por su participación en el Producto Bruto Interno (PBI), sino también por sus efectos multiplicadores hacia otros sectores de la economía. Sin embargo, el sector está constantemente expuesto a diversos riesgos operativos externos, los cuales incluyen las paralizaciones en las vías de acceso a las unidades mineras por protestas de las comunidades. De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, gran parte de los conflictos sociales generados son socioambientales (98 casos), de los cuales 63 son en el sector minero.

Cabe precisar que la actividad minera aún no se recupera a los niveles previos a la pandemia, debido a las constantes manifestaciones e incertidumbre generados por la pobre gobernabilidad. Según el Instituto Peruano de Economía (IPE), representó un costo de más de S/ 1,500 millones, reduciendo en 2.3% el crecimiento del sector minero-metálico; únicamente debido a la falta de capacidad del Gobierno para buscar una conciliación entre las demandas de las comunidades y las empresas. Un caso preocupante es la paralización de la mina Cuajone; la cual genera una pérdida al país de US\$ 5 millones diarios en exportaciones y S/ 8 millones por concepto de impuestos y regalías.

De esta manera, en 2022 el Perú está enfrentando tres tipos de *shocks*: i) un *shock* interno causado por la crisis política y medidas populistas del gobierno que incrementarían el déficit fiscal, ii) un *shock* externo que

provoca el alza de los costos de energía, insumos y alimentos y iii) un *shock* externo que genera un incremento de los precios de los metales. De estos, los dos primeros son negativos y sólo el último positivo. El resultado final para la economía dependerá tanto del Ejecutivo como del Legislativo, para generar soluciones y no nuevos problemas.

 [info@ratingspcr.com](mailto:info@ratingspcr.com)

 [www.ratingspcr.com](http://www.ratingspcr.com)

 Pacific Credit Rating

**PCR** | PACIFIC  
CREDIT  
RATING